

**URGENTE**

Villavicencio, 15 SEP 2017

Señor (a)  
Representante legal  
CONSORCIO PIL-PROTEK  
Carrera 9 Bis No. 95-07  
Bogotá DC

ASUNTO: Notificación por Auto No. 565 de 25 Agosto del 2017.  
Radicado No. Oficio

Por medio de este **AVISO**, y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de 2011), se le Notifica el contenido del Auto No. 565 del 25/08/2017, expedido por la Coordinadora del Grupo Prevención, Inspección, Vigilancia, Control, Resolución de Conflictos Conciliaciones de la Dirección Territorial Meta. Lo anterior teniendo en cuenta que no fue posible realizar la Notificación personal del acto, conforme a lo establecido en los Artículos 67 y Siguietes del mismo Código.

Atentamente,



**MERCEDES MORALES NARANJO**

Coordinadora Grupo Prevención, Inspección Vigilancia, Control  
Resolución de Conflictos - Conciliación

Anexos: dos (2) folios.

Copia:

Transcriptor: F. Cabrera  
Elaboró: F. Cabrera  
Revisó/Aprobó: Mercedes M.




**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**DIRECCION TERRITORIAL DEL META**

**AUTO No. 0565**

**( AGOSTO 25 DE 2017)**

Asunto: VISITA DE CARÁCTER GENERAL  
 Empresa: CONSORCIO PIL-PROCTEK  
 Auto Comisorio: 00767- DEL - 24-09-2013.

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVA POR CADUCIDAD UNA  
 VISITA DE CARÁCTER GENERAL**

La suscrita Coordinadora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control - Resolución de Conflictos-Conciliación de la Dirección Territorial del Meta, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 41 del Decreto Ley 2351 de 1965 modificado por la Ley 828 de 2003, 97 de la Ley 50 de 1990, Resolución No. 2143 de fecha 27 de mayo de 2014, Ley 1610 de 2013, artículo 485 del CST y demás normas concordantes,

**CONSIDERANDO.**

Que mediante Auto No. 00767 del 24 de Septiembre de 2013, se comisionó a la Inspectora de Trabajo MERCEDES MORALES NARANJO funcionaria adscrita al Ministerio de Trabajo Territorial Meta, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales laborales, practicar Visita de Carácter General a la Empresa denominada CONSORCIO PIL PROCTEK- Nit. 900.438928-5 con Email.bogota@pilautomation.com con domicilio judicial en Carrera 9 Bis N° 95 07 de la ciudad de Bogotá D.C, Representada legalmente por OSCAR OTERO GALAN identificado con número de cedula 79.285.405 de Bogotá D.C, según el ACTA DE CONSTITUCION de fecha 23-05-2011, la diligencia fue atendida por María Fernanda Méndez Romero en calidad de Director Administrativa de la referida Empresa (f.2-f.7).

Se observa los siguientes documentos: Acta de Constitución del Consorcio (f.8-f.12); Copia de prima primer semestre 2012 (f.12-f.14); Copia Actas de reunión de Copaso (f.15 -f.18); Copia de planillas de aportes a seguridad social de septiembre 2013 (f.15-f.22), copia de nómina y planilla de aportes a seguridad social de Agosto 2013 (f.23- 26) copia de nómina y planilla de aportes a seguridad social de Julio 2013 (f.27-f.31); copia de nómina y planilla de aportes a seguridad social de Junio 2013 (f.32-f.33); copia del pago de prima semestral 2013 (f.34-f.40); copia informe de Cesantías con sus respectivas transferencias periodo 2012 (f.41-f.49); Registro de Vacaciones (f.50-f.52); Copias de nóminas discriminada de los meses junio, julio, agosto 2013 (f.53-f.56), Copia de publicidad de reglamento Interno de Trabajo (f.56 -f. 80), copia de contrato individual de trabajo (f.81-f.84), Respuesta del consorcio anexando documentos solicitados con Radicado 4182 del 7 de septiembre del 2013 (85), copia de soporte de autorización de descuento de trabajadora de los meses junio, julio, agosto 29013 ( f.85 -f.90), actas de socialización del reglamento técnico de instalaciones (f.93-f.100), copia de soportes de la entrega de bonos Gaitán Pass a los trabajadores(f.101 -f.149); Copia de la modificación al contrato de diferentes fechas (f.150 -f 205)

El día 29 de noviembre de 2013 mediante oficio N° 3637 La inspectora de conocimiento requiere a la Empresa para que afilie a los trabajadores a la caja de compensación familiar del Meta (f.206)

El 8 de enero de 2013 la Funcionaria inicialmente designada mediante Memorando, hace devolución del expediente a la Coordinadora, sin que se observe que este haya sido entregado a otro Inspector para continuar el trámite.

El día 14 de julio de 2017, mediante MEMORANDO la Coordinadora del Grupo GIVC-RCC. Remite el presente expediente a la Inspectora de Trabajo MARIELA NIÑO HERNANDEZ, funcionaria adscrita a la Territorial Meta Ministerio, con el fin de que se le proyecte el Auto de Archivo por Caducidad a la presente diligencia (f.207).

*Yañez*

Continuación Auto mediante el cual se archiva una visita de carácter general.

Aunado a lo anterior se tiene que del tiempo que se realizó la visita al día de hoy han transcurrido más de tres (3) años desde la práctica de tal diligencia.

**PARA RESOLVER EL DESPACHO TENDRA EN CUENTA**

En armonía con el numeral 1, artículo 4 del Convenio 81 y el numeral 1, del artículo 7 del Convenio 129, el órgano rector del sistema de inspección en Colombia, es el Ministerio del Trabajo, en quien está radicada la competencia de su vigilancia y control.

El contenido y ámbito de acción del sistema de inspección colombiano, es concordante con el contenido de los Convenios 81 y 129, y se amplía al determinar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio del Trabajo, según el artículo 1 del Decreto-ley 4108 de 2011, a través "un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control" así como al establecer el numeral 14 del artículo 2, la función especial del Ministerio de "Ejercer, en el marco de sus competencias, la prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo y empleo, e imponer las sanciones establecidas en el régimen legal vigente."

La naturaleza del sistema de inspección en Colombia, es pública, y de conformidad con su esencia de policía administrativa laboral, pertenece a la estructura de la administración de derecho público, como monopolio administrativo gubernamental. Concordantemente, la racionalidad de la actuación estatal en el sistema de inspección se basa a diferencia de la actuación privada, en finalidades públicas y se dirige, al cumplimiento de los cometidos del Ministerio del Trabajo, en especial de la salvaguarda del orden público, a través de la garantía del cumplimiento de la normatividad laboral y demás disposiciones sociales.

Ello se verifica en el contenido de los artículos 17, 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, que radican la competencia de la vigilancia, control y cumplimiento de las disposiciones laborales y sociales en las autoridades administrativas del trabajo, las cuales hacen parte del Ministerio del Trabajo. Para su realización, son establecidas facultades administrativas a sus funcionarios, y a las que en el ejercicio de su función, les son asignadas legalmente potestades administrativas especiales y una facultad como autoridad de policía, administrativa general y permanente de imposición de multas.

De acuerdo a la Ley 1610 de 2013, Norma que regula aspectos sobre las Inspecciones de Trabajo señala en su Artículo 1 que los Inspectores de Trabajo y seguridad social ejercerán sus funciones de de la Inspección vigilancia y Control en todo el Territorio Nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos del sector privado.

De conformidad a lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, se asigno al Ministerio de trabajo la calidad de Autoridad de vigilancia y control en lo referente al cumplimiento de las Normas Laborales y de Seguridad Social, así mismo están facultados para imponer sanciones pertinentes a la violación de las disposiciones de trabajo y seguridad social.

Ahora bien, desde la práctica de la visita de carácter general al día de hoy han transcurrido tres (3) años, diez (10) meses y veintidós (22) días y no existe dentro del expediente documento alguno con el cual se pueda determinar que la funcionaria de conocimiento haya dado impulso a la actuación administrativa o que dicho libelo haya sido entregado a la anterior o actual Coordinadora del Grupo de IVC-RCC, por lo que será del caso archivar por caducidad.

En razón de su condición de actividad punitiva del Estado, la imposición de sanciones administrativas se encuentra sujeta al artículo 29 de la Constitución que consagra el derecho al debido proceso. De esta manera los principios del derecho penal –como forma paradigmática de control de la potestad punitiva– se aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. El debido proceso, por su parte, comporta una serie de garantías como la publicidad y celeridad del

Continuación Auto mediante el cual se archiva una visita de carácter general.

procedimiento, el derecho de defensa y contradicción, el principio de legalidad del ilícito y de la pena, la garantía del juez competente, etc., que sólo tienen sentido referidas a la actividad sancionadora del Estado. Es decir, son garantías aplicables al proceso de imposición de sanciones.

Sin embargo, la potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente de la potestad punitiva penal, por cuanto con ésta última, además de cumplirse una función preventiva, se protege "el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente", mientras que con la potestad administrativa sancionatoria se busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones. "En efecto, la fracción de poder estatal radicada en cabeza de la administración, se manifiesta a través de una gama de competencias o potestades específicas (de mando, ejecutiva o de gestión, reglamentaria, jurisdiccional y sancionadora), que le permiten a aquella cumplir con las finalidades que le son propias"

A las consideraciones anteriores sobre la jurisprudencia constitucional colombiana, es importante agregar que ésta se inscribe dentro de una tendencia, en varias democracias, a garantizar el debido proceso en materia de sanciones administrativas sin trasladar automáticamente el mismo rigor garantista del derecho penal, ni desatender las especificidades de este tipo de sanciones en cada uno de los contextos donde han sido establecidas por el legislador.

En desarrollo del principio del debido proceso, la Corte Constitucional en Sentencia C-401 de 2010, resaltó que la potestad sancionadora de las autoridades titulares de funciones administrativas, en cuanto manifestación del *ius puniendi* del Estado, está sometida al principio de prescripción que garantiza que los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios.

De dicha jurisprudencia constitucional se desprende, entonces, el criterio conforme al cual la facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo y que el señalamiento de un plazo de caducidad para la misma, constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general. Dicho plazo, además, cumple con el cometido de evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración.

Reiteradas sentencias de la Corte Constitucional han expresado que la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente abierta, y si el Estado no ejercita el derecho que tiene de adelantar y fallar la investigación disciplinaria en el tiempo fijado por el legislador, ya sea por desinterés, insuficiencia de recursos administrativos, o cualquier otra situación atribuible al ámbito de su competencia, no puede el administrado sufrir las consecuencias que de tales hechos se derivan.

En ese sentido, tanto la jurisprudencia constitucional como la del Consejo de Estado, han sido reiterativas al identificar entre las características de la facultad sancionadora del Estado las siguientes:

- La facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo.
- El señalamiento de un plazo de caducidad de la acción sancionadora del Estado, constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general
- Las garantías procesales se consagran para proteger los derechos fundamentales del individuo y para controlar la potestad sancionadora del Estado.
- La finalidad de establecer un plazo de caducidad de la acción sancionadora no es otra que la de evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración.

#### Tesis del Consejo de Estado sobre la caducidad de la facultad sancionatoria

Vale la pena señalar que con la redacción del artículo 38 del C.C.A. del decreto 01 de 1984 surgieron diferentes teorías jurisprudenciales, tratadas por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionadas con el acto o actuación por parte de la Administración que interrumpe el término de caducidad, advirtiendo que el criterio expuesto se hace cada vez más exigente o restrictivo. Sin embargo, con la expedición de la ley 1437 de 2011, la controversia doctrinaria quedó zanjada

*[Firma manuscrita]*

